

**PORTAL DE TRANSPARENCIA  
SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA**

**Nº EXPEDIENTE:** 001-068230

**FECHA DE LA SOLICITUD:** 26 de abril de 2022

**NOMBRE:** [REDACTED]

**NIF:** [REDACTED]

**CORREO ELECTRÓNICO:** [REDACTED]

Con fecha 26 de abril de 2022 tuvo entrada en el Portal de Transparencia solicitud de acceso a información pública, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por [REDACTED], solicitud que quedó registrada con el número 001-068230, y asignada al Instituto de Crédito Oficial el 20 de mayo, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 para su resolución, y cuyo contenido literal es el siguiente:

**Asunto**

*POSIBLES REINTEGROS CRÉDITOS ICO*

**Solicitud de información**

*Por la presente solicito información al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.*

*Relación de avales ICO concedidos a personas jurídicas para mitigar los efectos negativos de la pandemia -bajo el paraguas de las dos líneas activadas por el Gobierno al amparo del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo y el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio- cuyo reintegro eventualmente se hayan podido solicitar a los beneficiarios por incumplimiento de las condiciones. Ruego que se facilite la identidad de la empresa, el importe de la operación, el dinero reclamado y si los fondos se han recuperado ya o están en fase de reclamación*

**Respuesta**

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una Entidad Público Empresarial adscrita a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, con naturaleza jurídica de Entidad de Crédito y consideración de Agencia Financiera del Estado.

Los Estatutos del ICO, aprobados mediante Real Decreto 706/1999<sup>1</sup>, establecen que el Instituto tiene personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, actuando con autonomía en la gestión. No consolida con las cuentas del Estado y no recurre a los Presupuestos Generales del Estado ("PGE"), obteniendo sus recursos en los mercados de capitales, contando para ello con garantía del Estado español.

Como entidad de crédito, el ICO opera en condiciones de mercado ofreciendo financiación a empresas de todos los sectores y tamaños, sin conceder ayudas públicas ni subvenciones, y está sujeto a normativa de supervisión y control del Banco de España, bajo el principio de equilibrio y suficiencia financiera.

---

<sup>1</sup> Real Decreto 706/1999 <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-10738>



Los avales regulados en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (“Real Decreto-ley 8/2020”) y el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (“Real Decreto-ley 25/2020”) y las condiciones desarrolladas en los Acuerdos de Consejo de Ministros, respetan en todo caso la **normativa financiera** que regula la actividad de las entidades financieras sujetas a supervisión del Banco Central Europeo y del Banco de España, así como la **regulación comunitaria sobre Ayudas de Estado de la Unión Europea** a empresas. Se puede consultar la base normativa y funcionamiento de las líneas de avales que rigen las operaciones avaladas, entre ellas las relativas a la consulta planteada, a través del siguiente enlace: <https://www.ico.es/en/web/quest/ico/linea-avales-covid-19>. Hay que destacar sobre las operaciones avaladas que:

- Se tratan en todo caso, de operaciones de financiación otorgadas a autónomos y empresas por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago o entidades de dinero electrónico que hayan suscrito con el ICO los correspondientes contratos marco para participar en la Línea de Avales.
- La entidad financiera es - y no el ICO - la que decide sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente elegible de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos.

En su labor como agente financiero del Estado, el ICO gestiona por cuenta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las Líneas de Avales COVID a través de las entidades financieras: hasta el 31 de diciembre de 2021 se han movilizado más de 135.382 millones de euros en financiación al tejido productivo en 1.148.187 operaciones.

En estas operaciones de financiación, cuya concesión ha sido decidida por las entidades financieras - y no por el ICO - de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos, éstas deben preservar sus intereses económicos y comerciales y los de sus clientes, así como el deber de confidencialidad. A este respecto, las operaciones de las entidades financieras con sus clientes estarían sujetas a los casos del **límite de derecho al acceso contemplados en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia**, entre otros a las letras h) sobre intereses económicos y comerciales y k) sobre garantía de confidencialidad.

Aún más y complementariamente, la **Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito** establece en su artículo 83 el deber de reserva de información, disponiendo en el mismo que las entidades de crédito están obligadas a guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y demás operaciones de sus clientes, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros u objeto de divulgación. Añadiendo la misma disposición que el incumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo será considerado infracción grave y se sancionará en los términos y con arreglo a lo previsto en el Título IV de la citada norma. En consecuencia, han de respetar el deber de confidencialidad en el ejercicio de sus actividades y no puede facilitar ni revelar información sobre sus clientes, con independencia de la naturaleza de los mismos, a terceros.

La información sobre las operaciones de financiación otorgadas por las entidades financieras a la empresa objeto de este expediente y avaladas al amparo del Real Decreto-ley 8/2020 y del Real Decreto-ley 25/2020, se encuentra publicada en la **Base de Datos Nacional de Subvenciones**, detallando fecha de concesión, importe, instrumento e importe de ayuda equivalente por beneficiario. En concreto se puede acceder a la misma a través de la siguiente página web en el apartado de Ayudas de Estado, e introduciendo en el cuadro dedicado a

beneficiario los datos del NIF y/o nombre/razón social del beneficiario sobre el cual se quiera realizar la consulta. <https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/ayuda>

Por otro lado, con periodicidad mensual, el ICO publica informe sobre la evolución de la Línea de Avals Covid-19 en la siguiente página web: <https://www.ico.es/web/ico/informes-seguimiento-linea-avales>, ofreciendo un grado de detalle sobre desglose geográfico, sectorial, por tamaño de empresa y plazo de operaciones.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente. Todo ello sin perjuicio de los Tribunales de Justicia para interpretar las leyes y aplicarlas.